

De “Lula light” a “Lula Libre” Estado, capital e inclusión social en tiempos de progresismo petista.

Ivone Cristina de Sá Cavalcante.

Cita:

Ivone Cristina de Sá Cavalcante (Diciembre, 2019). De “Lula light” a “Lula Libre” Estado, capital e inclusión social en tiempos de progresismo petista. XXXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Lima.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/cristina.cavalcante/2>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/p02v/ZGZ>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.



De “Lula light” a “Lula Libre”

Estado, capital e inclusión social en tiempos de progresismo petista.

Ivone Cristina de Sá Cavalcante

Resumen

El artículo presenta un balance crítico sobre los gobiernos nacionales del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil (2003-2016). Desde una perspectiva histórica, política y económica, problematiza el papel del Estado en el desarrollo capitalista a partir de las relaciones establecidas con las distintas fracciones del capital y con las clases populares, con el propósito de explicar el contexto de surgimiento de la experiencia “progresista” y ofrecer una interpretación sobre la dinámica del “modelo petista”, sus aproximaciones y rupturas con procesos políticos anteriores y sus contradicciones.

Palabras clave

Gobiernos Lula y Dilma; Progresismo; Estado; Desarrollo capitalista.

Abstract

From "Lula light" to "Free Lula": State, capital and social inclusion in times of Progressive Governments. The article presents a critical balance on the national governments of the Workers Party (PT) in Brazil (2003-2016). From a historical, political and economic perspective, problematizes the role of the State in capitalist development based on the relations established with the different fractions of capital and with the popular classes, with the purpose of explaining the context of the emergence of the “progressive” experience and offer an interpretation of the dynamics of the Brazilian model, its approaches and ruptures with previous political processes and their contradictions.

Keywords

Lula and Dilma governments; Progressive governments; State; Capitalist development.

Introducción

En los últimos quince años, Brasil partió del “milagro progresista” a una profunda crisis económica, social y política. Después del “éxito” del modelo “Lula *light*” -de la izquierda capaz de hacer alianzas con amplios sectores sociales, garantizando el apoyo del empresariado y de las clases populares-, desde mediados de 2013 el país atraviesa la emergencia de manifestaciones sociales, crisis económica, pasando por el juicio político



de Dilma Rousseff y la prisión política del ex presidente Luiz Inácio (Lula) da Silva, además de reformas implementadas por el gobierno de Michel Temer (MDB)¹ que quitaron una serie de derechos sociales. Por ser el momento donde las contradicciones se exacerbaban, toda crisis exige un balance del proceso que la antecede.

Proponemos un balance de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) con enfoque en la orientación que estos dieron al Estado, considerando la centralidad del tema en los debates acerca de las experiencias “progresistas” en Sudamérica. Se habla de un nuevo “activismo estatal” o, como García Linera (2016) lo definió, un “Estado de nuevo tipo”, capaz de promover la inclusión de las clases populares. Las interrogantes en este trabajo giran en torno a ¿qué “nuevo tipo” de Estado sería el que se configuró en Brasil? ¿Cuáles son sus aproximaciones y rupturas con procesos políticos anteriores y las estrategias utilizadas por estos gobiernos para alcanzar sus “logros” ya que, antes que nada, actuaron dentro del orden del capitalismo? Para contestar tales preguntas, comprendemos ser necesario identificar la relación que se estableció con las distintas fracciones del capital, las políticas estatales que fueron implementadas y los agentes que fueron favorecidos. Así como investigar la naturaleza de la inclusión de las clases populares, si permitió su constitución como sujetos políticos que imponen una pauta a ser disputada en el Estado, o si fue una inclusión basada en la pasivización de las masas.

Argumentamos que estos gobiernos buscaron reactivar el papel del Estado como gran propulsor del desarrollo económico nacional -papel abandonado tras el período de redemocratización²-, rescatando rasgos del desarrollismo de los gobiernos populistas³ y militares⁴, sin embargo, sin romper con el poder que el capital financiero pasó a ejercer principalmente a partir de los años 1990. La articulación entre límites estructurales y proyecto político “nuevo” desarrollista resultó en lo que llamamos de *soberanía al revés*: anclada en una economía extractivista de exportación de bienes primarios, que promovió el fortalecimiento de grandes grupos económicos principalmente del sector privado, para que éstos pudieran competir en el mercado global, impulsando su proceso de internacionalización y/o transnacionalización. Al mismo tiempo, abriendo el país hacia una masiva entrada de capital internacional.

Este modelo, que se mantuvo bajo el *boom* de las *commodities*, permitió la transferencia de parte de los excedentes para la creación y ampliación de planes sociales con el objetivo de incluir las clases populares por vía del consumo, ayudando en la reactivación del mercado interno, al mismo tiempo que despolitizaba la pobreza y permitía la



maximización de las ganancias del gran capital. Así, esta inclusión garantizó un cierto grado de legitimidad social a partir de la pasivización de las masas y ocultó demandas y conflictos sociales que se generaron a partir de las “vías” escogidas.

El progresismo petista

No es objeto de este trabajo discutir los cambios por los cuales pasa el PT desde su fundación en 1980, pero algunos elementos centrales necesitan ser destacados para que se pueda comprender qué programa se había vuelto hegemónico dentro del partido en el momento en que éste llega al poder ejecutivo: la antigua defensa de un programa democrático-popular y anticapitalista da lugar a un proyecto que se presenta como "antineoliberal", y la lucha antimonopolista y antiimperialista es sustituida por la búsqueda de "soberanía" (comprendida como inserción económica soberana en el orden económico internacional) (Iasi, 2006). Así, la candidatura de Lula, en 2002, fue presentada como la "alternativa antineoliberal" que promovería una nueva política económica centrada en la inversión productiva y en la “valorización del trabajo”⁵, rompiendo con el "neoliberalismo vigente" sin reanudar el "nacional-desarrollismo caduco"⁶.

Para el PT de los años 2000, estos cambios estructurales sólo se podrían sostener en la construcción de un "nuevo contrato social" basado en una alianza con los "empresarios productivos de cualquier tamaño" y amplia inclusión social, donde todos - a excepción de gran rentistas y especuladores - podrían beneficiarse "con la ampliación del mercado de consumo de masas y con la desarticulación de la lógica financiera y especulativa"⁷. Compete a la confrontación con los hechos identificar hasta qué punto y cómo esas promesas se concretaron. Para esto, centraremos nuestra discusión en tres elementos del proyecto: el “antineoliberalismo”, la orientación del “nuevo desarrollismo” y cómo este “nuevo contrato social” se realiza.

El “antineoliberalismo” de brazos dados con el gran capital financiero

En 2002, meses antes de las elecciones presidenciales, Lula -que lideraba las indicaciones de votos- afirmaba el compromiso de su futuro gobierno con los intereses del capital financiero internacional. Con la "Carta al pueblo brasileño"⁸ aseguraba el respeto a las metas inflacionarias, disminución de la deuda pública, garantía de superávit primario, reformas estructurales y modernización del Estado. En el primer mandato (2003-2007), alcanzó un superávit primario de 4.25% del PIB, superior a lo establecido por el FMI en 2003, de 3.75%. Para esto, redujo los gastos sociales en las



áreas con participación más expresiva en el presupuesto federal (salud, educación y seguridad social) y aumentó los gastos con pago de la deuda⁹. Sin embargo, el programa fue presentado como la salida "antineoliberal" donde un mayor activismo del Estado permitiría la implementación de un nuevo modelo de desarrollo económico con inclusión social.

El énfasis en la transferencia de recursos hacia políticas sociales oculta que estos gobiernos no sólo "convivieron" con el gran capital financiero, sino que permitieron la maximización de sus ganancias, abriendo el país hacia un mayor flujo de capital extranjero y creando nuevas formas de acumulación. Según el estudio de James Petras (2013), la inversión extranjera directa (IED), que en 2002 fue de U\$ 16 mil millones, triplicó durante los gobiernos de Lula, llegando a U\$ 48 mil millones en su último año; la captación neta de IED y las carteras de inversiones totalizaron U\$ 400 mil millones entre 2007 y 2011, siendo cinco veces mayor que los cinco años anteriores; y las carteras de inversiones en valores de interés altos retornaron entre el 8% y el 15%, tasas de tres a cuatro veces mayores que las practicadas en Norteamérica y Europa. Son los datos que llevan al autor a decir que los gobiernos de Lula y Dilma fueron los más lucrativos para el capital financiero internacional y para los inversionistas de sectores agrominerales en la historia reciente del país.

El calentamiento del mercado de consumo de masas fue incentivado a través de programas sociales de transferencia de ingresos, aumento salarial, pero significativamente por medio de la ampliación del crédito. El destaque para los datos de disminución de la pobreza ocultan cómo esta vía de inclusión comprometió el ingreso de las familias y aumentó las ganancias del sistema financiero. En 2001 el crédito total en Brasil equivalía a 22% del PIB. En diciembre de 2014 era más del 58%, siendo 47% para personas físicas donde dos tercios eran destinados al "consumo libre". El endeudamiento de las familias, en 2006, representaba el 22% de sus ingresos. En 2015 saltó al 48% (Stolowicz, 2016).

Los bancos tuvieron ganancias exorbitantes. Un balance de la CONTEC¹⁰ (Oliveira, 2014), basado en datos del Banco Central, muestra que la ganancia neta del sistema financiero durante el periodo de 1995 a 2002 fue de U\$ 21.79 mil millones¹¹. Con Lula (2003-2010), ese valor fue seis veces mayor, pasando a U\$ 144.83 mil millones¹². Durante el primer gobierno de Dilma, en apenas dos años (2011-2013) el acumulo fue de U\$ 53.68 mil millones¹³. Incluso con la intervención del gobierno forzando la caída en las tasas de interés, en 2012, la rentabilidad de los bancos no se vio afectada. No



sorprende que, en plena crisis, con el desempleo llegando a 12.8% en 2017, solo en este año los principales bancos del país (Itaú, Bradesco y Santander) tuvieron ganancias que llegaron a los U\$ 16.8 mil millones¹⁴, un 15% más que en 2016 (Mansur, 2018).

El discurso “antineoliberal” o “posneoliberal” surge de la necesidad de enfrentar la crisis de legitimidad de los gobiernos que aplicaron la agenda neoliberal de los años 1990. Sin embargo, en la práctica, lo que se vio en Brasil con los “progresistas” fue la actuación de gobiernos que direccionaron políticas estatales para la maximización de las ganancias del gran capital financiero. Y no solamente de esta fracción del gran capital.

El "nuevo desarrollismo" y la "soberanía al revés"

Petras y Veltmeyer (2015) caracterizaron la "agenda posneoliberal" en América Latina como una forma de mitigar los costos sociales del extractivismo, donde el Estado juega un papel activo en la promoción de una política económica basada en la extracción de recursos naturales, la exportación de *commodities* y la distribución de recursos para la inclusión social. Pero, a diferencia de lo que afirman los autores, consideramos que en Brasil no hubo una total relación de dependencia del Estado con relación al capital extractivo, aunque hayan sido las exportaciones la principal fuente de excedentes que garantizaba crecimiento económico y transferencia de recursos para las políticas sociales.

Desde un punto de vista político, con Lula y Dilma el Estado fue el gran gestor y defensor de los intereses de la fracción "interna" del gran capital, presente en sectores como la construcción civil, naval, la industria de la transformación, minería y otros (Boito Jr., 2013)¹⁵, garantizando el apoyo de parte del empresariado descontento con las políticas estatales de los años 1990. En este sentido, la orientación del Estado debe ser comprendida también a partir del propio proyecto político, que como vimos, buscaba “soberanía” en una inserción más amplia y poderosa de las grandes empresas del país en el mercado internacional.

Una de las principales herramientas para poner en marcha el proyecto “nuevo desarrollista” fue el BNDES¹⁶, que pasa a ser el propulsor y financiador de los llamados "campeones nacionales", creando empresas con capacidad de disputa internacional. A diferencia del desarrollismo de los gobiernos “populistas” y militares, donde el Estado utilizaba el capital extranjero para impulsar la empresa nacional, el "nuevo" utiliza el capital estatal para articular el capital "brasileño" con el capital extranjero, fomentando la transnacionalización de capitales. Grupos como Odebrecht, OAS y JBS -que hoy son



líderes mundiales en los sectores de construcción e ingeniería química y petroquímica; construcción civil y mercado inmobiliario; e industria de alimentos, respectivamente-, recibieron grandes préstamos del banco a tasas de intereses muy por debajo del mercado, lo que permitió la compra de empresas competidoras fomentando la formación de grandes monopolios, donde el Estado actuó como una especie de banquero.

Los "progresistas", en Brasil, financiaron la expansión del capital monopolista, extractivo y transnacional en el país y fuera de las fronteras, abriendo los caminos de estas empresas en mercados principalmente en América Latina y África y dejando atrás despojo, impactos ambientales y conflictos sociales. Una parte significativa de los fondos destinados al pago de derechos laborales es que garantizó los recursos del proyecto. Entre 2003 y 2008, un promedio de más del 60% de los recursos del BNDES provenía directamente del FAT¹⁷, PIS- PASEP¹⁸, FGTS y FI-FGTS¹⁹, 11% del tesoro nacional y poco más del 9% de captaciones externas. A partir de 2009, el porcentaje de los recursos que provenían de estos fondos disminuye y el tesoro nacional pasa a ser la principal fuente de recursos del banco. Entre 2009 y 2016, el promedio del 31% provenía directamente de los fondos, 50% del tesoro nacional y demás fuentes gubernamentales, y poco más del 4% de captaciones externas²⁰. Hay que resaltar que no todo el presupuesto fue para el grupo selecto de "campeones", pero el banco brindó a esas empresas préstamos significativos²¹.

El PAC²², lanzado en 2007, fue otra herramienta para acelerar el "desarrollismo" predatorio. Entre las principales obras estaban previstas usinas hidroeléctricas, complejos petroquímicos y tramos de carreteras. Tanto este último como la política de los "campeones nacionales" muestran la contradicción en el tipo de "soberanía" perseguida por estos gobiernos, lo que nosotros llamamos de *soberanía al revés*²³: es "al revés" porque protagoniza lo "privado" en lugar del "público", se basa en la alta explotación de las riquezas naturales y en la apertura irrestricta hacia capitales extranjeros, significativamente en el agronegocio²⁴, y permite una mayor influencia en la economía internacional de las pocas familias que poseen la mayoría de las acciones de los grupos favorecidos.

Como Claudio Katz (2018) señala, durante el *ciclo progresista*, el *neodesarrollismo* se presentó como una estrategia para hacer frente a la falta de crecimiento económico, proporcionando auxilio estatal, bajas tasas de interés y tipos de cambio competitivos, pero, a diferencia del "viejo desarrollismo", buscó alianzas con el sector agro mineral exportador, rechazando parcialmente el proteccionismo y acercándose aún más a las



empresas transnacionales. Es una fórmula conservadora, según el autor, porque prioriza la política macroeconómica, omitiendo las transformaciones estructurales, el encogimiento de la industrialización y su especialización en procesos industriales muy elementales. En Brasil, mientras las exportaciones de materias primas pasaron de U\$ 55.3 mil millones en 2005 a U\$

162.2 mil millones en 2011, las exportaciones de bienes manufacturados fueron de U\$ 44.2 mil millones a U\$ 60.3 mil millones (Petras, 2013), un crecimiento que, aunque no expresa la muerte de la industria brasileña, demuestra el predominio de la exportación primaria y un retroceso de la industrialización que había alcanzado niveles significativos hasta la década de 1980.

La experiencia brasileña, así como Katz (2018) caracterizó a los "progresistas", buscó en el "afianzamiento del subdesarrollo" revertir el cuadro dejado por los presidentes derechistas. Pero el modelo implementado no supera los determinantes de la dependencia, es decir, el lugar que la economía ocupa en la división internacional del trabajo, la dinámica de las transferencias, el valor de la fuerza de trabajo, el papel de las clases dominantes y el destino de la renta. Como afirma el autor, todos estos determinantes hoy son muy influenciados por las inversiones de las empresas transnacionales que mueven sus capitales en función de mayor rentabilidad, de la modalidad de explotación y superexplotación en vigor, y del valor de la fuerza de trabajo. Al enfocar su orientación "desarrollista" en el fortalecimiento del capital transnacional, los gobiernos "progresistas" del PT se mantuvieron bajo la lógica de la "dependencia deseada", dando a ella una connotación más "nacionalista" que los gobiernos de los años 1990: el gran capital privado es "interno", aunque transnacional. La elevación del país al nivel de "potencia subdesarrollada" permitió un grado diferenciado de subordinación en comparación con otros países de la región, así como una mayor inserción de sus grandes grupos económicos en estas economías, pero se sustituye la búsqueda por una mayor independencia por la inserción subordinada a la lógica de expansión del gran capital, que opera rompiendo cualquier barrera para la libre circulación.

El "nuevo contrato social" como inclusión de consumo

Antes de ganar las elecciones de 2002, Lula ya había pasado por tres derrotas. El camino de la victoria fue trazado con cambios en el programa del partido, en las alianzas, en las estrategias y en el discurso. Uno de los objetivos perseguidos era ganar el



electorado más pobre, que tendía siempre a la derecha²⁵. O sea, la amplia base social del PT compuesta en este momento, por sectores de la clase media (intelectuales, funcionarios públicos, estudiantes) y de la clase trabajadora organizada en sindicatos y movimientos sociales, no era suficiente para ganar una elección sin los más empobrecidos, como manifestaba Lula después de la derrota contra Fernando Collor en las elecciones de 1989:

La verdad desnuda y cruda es que quien nos derrotó, además de los medios de comunicación, fueron los sectores menos aclarados y más desfavorecidos de la sociedad [...]. Tenemos amplios sectores de la clase media con nosotros - una parcela muy grande del funcionariado público, de los intelectuales, de los estudiantes, de la gente organizada en sindicatos, del llamado sector medio de la clase obrera. [...] Mi pelea es siempre esa: alcanzar el segmento de la sociedad que gana salario mínimo. Hay una parte de la sociedad que es ideológicamente contra nosotros, y no hay porque perder tiempo con ella: no sirve de nada intentar convencer a un empresario que está en contra de Lula a quedarse del lado del trabajador. Tenemos que ir a la periferia, donde hay millones de personas que se dejan seducir por la promesa fácil de casa y comida" (Lula, in Singer, 2009, p. 87, traducción nuestra).

Lula parece hablar de la necesidad de hacer trabajo de base para ganar las clases populares políticamente, y no por la "vía de la derecha", a través de la "promesa fácil de casa y comida". Después de la experiencia de democracia participativa en gobiernos locales en la década de 1990, el famoso "Presupuesto Participativo"²⁶ de Porto Alegre, el camino trazado fue lo contrario: convencer a los empresarios, pero no que deberían estar al lado de los trabajadores, sino que si llegaba a la presidencia Lula defendería sus intereses. Con las clases populares, el foco pasa a ser en los elementos más pragmáticos: casa y comida. Los mayores planes sociales dirigidos a los sectores más empobrecidos pasaban sobre esas dos cuestiones, como la *Bolsa Família* y el programa *Minha Casa, Minha Vida*²⁷.

La Bolsa Família se consagró como una de las principales marcas de los gobiernos del PT, sobre todo, de Lula. Lanzado en 2003, el programa unificaba y ampliaba programas ya creados en el gobierno de Cardoso y tuvo una inversión promedio del 0.5% del PIB. Fue el programa de transferencia que más contribuyó a la economía por su impacto directo en el consumo. Incluso después de una política sistemática de reducción del gasto social ejecutado por el gobierno de Michel Temer, el impacto del programa en la economía local es manifiesto: representa hasta el 6% del PIB de 579 municipios (Marchesini, 2018).



El programa fue presentado como uno de los principales factores responsables de la disminución de la pobreza y de la desigualdad social, junto con el aumento del salario mínimo. Pero, aunque el crecimiento de este último haya sido continuo, si se compara con el valor considerado ideal por el DIEESE²⁸, el oficial tendría que ser alrededor de cuatro veces mayor²⁹. Y si consideramos que, aunque con las evoluciones progresivas de la Bolsa Familia,

- en el valor y en el número de beneficiarios-, un "beneficio" individual nunca llegó al valor de un salario mínimo³⁰, podemos decir que este programa fue capaz de garantizar la supervivencia de aquellos que oscilan entre el desempleo y la inserción precaria en el mercado de trabajo de salario mínimo³¹, representando un gasto extremadamente bajo para el Estado.

El impacto político e ideológico de la Bolsa Familia tampoco puede ser ignorado en función del beneficio inmediato: condiciona a los más empobrecidos a una relación de tutela estatal, no los incorpora como sujetos políticos porque no politiza la pobreza. Como bien identifica Beatriz Stolowicz (2016), los gobiernos del PT implementaron una concepción rostowiana de modernización capitalista como inclusión de las masas en el mercado de consumo, y de la ciudadanía como individuos transformados en consumidores. El abandono de la lucha anticapitalista por los "progresistas" transformó la desigualdad de riqueza en desigualdad de ingresos, los sujetos de derecho en consumidores de activos, tal como regía la cartilla del Banco Mundial y sus estrategias "posneoliberales" para la gestión de la miseria formuladas ya en los años noventa. No es coincidencia que los gobiernos de Lula y sus políticas de inclusión recibieron elogios del BM y del FMI y se convirtieran en referencia mundial: su operación propagandística funcionó para transformarlo en modelo para la región, eficaz porque logró legitimar la expansión del gran capital a partir de la combinación entre maximización de las ganancias, inclusión social de consumo y pasivización de las masas.

Nos parece interesante un paralelo entre el populismo brasileño y el "progresismo petista", entre Vargas y Lula: ambos marcaron la historia política del país como los "padres de los pobres", por proponer una incorporación parcial y controlada de las clases populares y la centralidad del Estado como "árbitro" de los intereses entre las clases³². Sin embargo, durante el populismo la incorporación fue también política, aunque restringida al sindicalismo de Estado. La contradicción estuvo en la radicalización de la organización de las clases trabajadoras, que llevó a una agudización de la lucha de clases, generando una presión sobre el Estado por la ampliación de las



demandas populares. En el “progresismo petista” el protagonismo del consumo aleja a las clases populares de la lucha política, y el abandono de las luchas por reformas populares (como reforma agraria y control popular de los fondos públicos) da lugar a la gestión estatal de la pobreza y de la miseria, representando un retroceso para la organización de las clases populares alrededor de pautas que podrían llevar a cambios estructurales.

La crisis

En términos políticos, podemos decir que el "progresismo petista" tuvo dos grandes pilares: la búsqueda por “soberanía” entendida como una mayor inserción en el orden económico mundial y la inclusión limitada y controlada de las clases populares. El "nuevo" desarrollismo, teniendo como estrategia central el apalancamiento de los "campeones nacionales", promovió monopolios y la transnacionalización de esos capitales con recursos estatales, donde parte significativa salía de los fondos destinados al pago de derechos laborales y del Tesoro Nacional. El "nuevo contrato social" se realizó principalmente a partir de la inclusión de consumo, con transferencias de recursos y ampliación de crédito, lo que permitió el calentamiento del mercado interno. La fórmula de Lula para mantener la “governabilidad” fue no tocar a los del "nivel de arriba": no bajó las tasas de interés ni controló la política cambiaria, permitió la entrada de IED y la libre circulación de capital, no tasó las grandes fortunas y aún maximizó las ganancias del sistema financiero con la ampliación de crédito para los más pobres.

El modelo tuvo éxito mientras había la bonanza de las *commodities*, que aseguró superávit y permitió la expansión del gasto social, aumento de salarios - aunque por debajo del ideal necesario - y consumo. La gran debilidad se encuentra en que el modelo no altera las estructuras heredadas del proceso de desmantelamiento de la industria nacional, dejando a la economía rehén de las exportaciones primarias. Cuando el precio de las materias primas cae en el mercado internacional, la economía pasa a sentir lo que no había sentido en la crisis de 2008, llamada de *marolinha*³³ por Lula. Dilma sufrió con la resaca³⁴.

En su primer año de gobierno, en 2011, los principales productos exportados tuvieron una caída significativa en sus precios: la tonelada del mineral de hierro cae de 180 a 55 dólares, el barril de petróleo crudo pasa de 140 a 50 dólares, y el saco de soja de 18 a 8 dólares. En el final del primer mandato, el valor de las exportaciones de materias primas representaba más de la mitad del valor total de las exportaciones (Anderson, 2016). La falta de crecimiento económico, con un PIB del 2.7%, en 2011 y que cae al



1% en 2012, también se debía al retroceso en el consumo. La fórmula de "inclusión" por ampliación de crédito, como vimos, llevó al endeudamiento de las familias, representando en 2015 el 48% de sus ingresos (Stolowicz, 2016).

Con las dos principales fuentes de recursos estancadas, el primer gobierno de Dilma buscó la conformación de una nueva matriz económica. La orientación era disminuir la tasa de interés, aumentar los gastos públicos e interferir en la política de cambio. Se rompe con el acuerdo de Lula con el mercado financiero. Al mismo tiempo, el gobierno mantuvo los gastos con los programas sociales y pasó a invertir aún más en infraestructura a través de las obras del PAC, causando un desequilibrio en las cuentas públicas. Por medio de estas políticas, quería garantizar el apoyo de parte del empresariado nacional y mantener la tasa de desempleo estable a partir del fomento de puestos de trabajo precarios y temporales, aprovechándose de las obras para el Mundial de 2014 y las Olimpiadas de 2016. Lo que logró: el desempleo tuvo una leve alza en 2012, llegando a 7.19%, y cae para 6.67% en 2014. La "nueva matriz" no fue capaz de generar crecimiento económico, todavía, posibilitó una relativa aprobación del gobierno, que llega a 77% en 2012, cayendo para 65% en marzo de 2013. Sin embargo, la campaña internacional de la prensa financista siguió fuerte contra la política económica de Dilma.

Es a partir de 2013 también que la ruptura del relativo equilibrio social va a presentarse de forma abrupta y masiva, aunque los conflictos en el campo, durante todo el período "progresista" se mantuvieron en alza³⁵, y desde 2012 las huelgas aumentaban³⁶. Pero, con las *jornadas de junio de 2013* una serie de manifestaciones que se inician en São Paulo por la cuestión del transporte público, rápidamente crecen de forma espontánea, tomando las principales capitales del país con miles de personas que reivindicaban "escuelas y hospitales estándar FIFA". Era evidente el descontento social con el modelo de desarrollo que invertía en la construcción de estadios de fútbol en detrimento de la mejora de los servicios públicos. Después de las manifestaciones, la aprobación nacional del gobierno cayó al 30%.

Con Dilma, se exacerban las contradicciones del modelo y hasta la fidelidad de parte del electorado más pobre se ve comprometida. Aunque ella haya ganado las elecciones de 2014, el margen fue apretado. El candidato de la derecha, Aécio Neves (PSDB)³⁷, perdió por una diferencia de 3.2%, y de los 51 millones de votos recibidos, 30 millones fueron de origen popular (Sader, 2016). El candidato se esforzó por subrayar en todos sus discursos que mantendría la Bolsa Familia. Es un hecho que Dilma ganó disparado



en el noreste brasileño, región de origen de Lula. El sur y sureste, todavía, se direccionaron para la oposición.

Una hipótesis que pueda explicar la victoria del PT en noreste, y su derrota en el sur y sureste, es que la primera región fue objeto de transformaciones más profundas, con programas federales de impacto local, como la transposición del Río São Francisco que impactó positivamente en el problema de la sequía, ampliación de infraestructura y acceso a saneamiento básico, así como otros programas de carácter nacional, pero que dada las condiciones históricas de mayor desigualdad y precariedad de las condiciones de vida del pueblo de noreste, impactaron de forma más directa a una gran mayoría, como los programas de combate a la mortalidad infantil y de alfabetización. De esta forma, en esta región la mejora en la calidad de vida tendría sido más claramente vinculada a un programa de gobierno, haciendo con que el electorado se identifique con el partido y responda positivamente en las urnas.

Ya en las regiones sur y sureste -históricamente más desarrolladas por los modelos implementados en periodos anteriores, que no resolverán el problema de la integración nacional- las políticas que tuvieron mayor impacto pueden haber sido las que ampliaron el consumo, como el incentivo a la ampliación del crédito que permitió la compra de automóviles y electrodomésticos, y que impactaron tanto a los sectores más empobrecidos cuanto a las “clases medias”. Desvinculados de un trabajo político en las bases sociales, el aumento del consumo pasa por la despolitización de la pobreza, y las políticas que o fomentan pasan a ser vistas como políticas del propio mercado, sin vinculación a un proyecto de gobierno. Además de que requieren del “esfuerzo individual”, meritocrático, de pagar por lo que se consume a través de crédito facilitado. Fortalece la idea de que “no fue el gobierno que hizo nada por mí, soy yo quien trabaja para pagar mis cuentas”, así como se aumenta el rechazo a aquellos que son vistos como dependientes de la Bolsa Familia, que “no trabajan y viven de los impuestos que los que trabajan pagan”, fomentando también el rechazo al propio partido y a las políticas sociales que este implementa, vista por muchos como políticas populistas que sirven de moneda de troca por votos.

Las elecciones de 2014 también demostraron la pérdida del apoyo por parte del empresariado, que votó de forma expresiva en el candidato de la oposición, cuadro distinto de las otras elecciones. Todavía, ante las presiones e insatisfacción del mercado financiero, la decisión de Dilma fue atender a sus exigencias, sustituyendo a Guido Mantega por el economista de la Universidad de Chicago, Joaquim Levy, que pasa a



ocupar el Ministerio de Hacienda en 2015. La nueva orientación era controlar la inflación, reducir créditos de los bancos públicos, recortar gastos sociales, ampliar las concesiones (privatizaciones) y recuperar el superávit primario. ¡En fin, la vieja agenda! El ajuste fiscal implementado ya en los primeros meses del segundo mandato dejaba claro que el gobierno bajaba la guardia al capital financiero y pasaba la cuenta a los trabajadores. Las medidas, sin embargo, no surtieron los efectos esperados y en 2015 el país entra en recesión, con un decrecimiento de 3.8% del PIB. El desempleo, que en 2010, era de 6.7%, crece para 11.6% en 2016.

La campaña por el *impeachment*, iniciada luego de las elecciones, expresó un gran "acuerdo nacional" que incluía la mayor parte de los partidos y miembros del Congreso, junto con sectores del empresariado, medios de comunicación hegemónicos y sectores de las clases medias, estas movilizadas por todos los anteriores. El candidato del PSDB derrotado en las urnas, también senador, fomenta la campaña dentro del Congreso armando alianzas con el MDB, ambos, entre los partidos con el mayor número de bancadas. Tenían el "ingrediente especial", Eduardo Cunha (MDB), enemigo político de Dilma y, en 2015, presidente de la Cámara de Diputados, que aprueba la solicitud de juicio político. Un elemento unificador aparece: las investigaciones de la operación *Lava Jato*, que comprometen buena parte de la clase política y que avanzaron durante los gobiernos de Dilma.

Por parte del empresariado, la FIESP³⁸ empieza una campaña, primero por renuncia y luego por el juicio político, seguida por la CNI³⁹, CNA⁴⁰, FIRJAN⁴¹ y Febraban⁴². Aquellos que vieron sus intereses representados por el "progresismo" petista, en lugar de presentar resistencia al mayor avance del sistema financiero internacional sobre el Estado, pasan a posicionarse a su lado, exigiendo a cambio algunas concesiones como el no aumento de impuestos, reforma laboral y medidas que puedan garantizar un abaratamiento de los costos del valor de la fuerza de trabajo (Martuscelli, 2017).

La resistencia contra el golpe vino de parte de las izquierdas organizadas, tanto las que estuvieron en la base de apoyo de los gobiernos Lula y Dilma, como las que se posicionaron críticamente, pero que comprenden la necesidad de defender el sistema democrático y el riesgo de que los sectores aún más conservadores asumieran el poder ejecutivo -lo que, de hecho, se concreta con la victoria de Jair Messias Bolsonaro, en las elecciones de 2018. Aunque con todas sus contradicciones, en la actual configuración del escenario político brasileño, el PT siguió siendo un canal de negociación para garantizar mínimamente algunas demandas para las clases populares.



Acerca de un proceso abierto

Nuestro balance tuvo como objeto central la orientación que los gobiernos petistas dieron al Estado, considerando la relación que se estableció con el capital y con las clases populares, pasando por las estrategias para la implementación del proyecto que se ha hecho llamar “progresista”. Con los argumentos presentados, buscamos contribuir al análisis crítico acerca del modelo brasileño, propagado por muchos como el más exitoso en la región. Es necesario desmitificar el “progresismo petista” preguntándonos a quién más benefició, y la inclusión parcial y controlada de sectores de las clases populares no puede encubrir el hecho que los grandes beneficiarios de la “tutela” estatal fueron el gran capital financiero, extractivo, monopolista y transnacional.

Los límites y contradicciones de la experiencia petista nos retan pensar en las consecuencias del alejamiento de los gobiernos “progresistas” de las luchas por reformas estructurales de carácter popular y su adecuación a las tácticas y estrategias para la libre circulación de capital. También implica atención hacia los límites del “nuevo” desarrollismo como estrategia de construcción de “soberanía”. El modelo, que no rompe con los determinantes de la dependencia, demuestra que pese a un mayor “activismo estatal”, lo que se logró fue una inserción subordinada a la lógica de expansión del gran capital transnacional. Las políticas económicas implementadas a partir del golpe de 2016 parecen indicar un camino de reestructuración de la hegemonía del capital financiero internacional sobre el Estado brasileño, demostrando la pérdida de influencia del gran capital “interno”. Los “campeones nacionales” como Odebrecht, JBS y OAS, investigados en la operación *Lava Jato* por involucramiento en casos de corrupción, fueron el blanco para el desmantelamiento del “nuevo” desarrollismo progresista, una vez que las denuncias legitiman el viejo discurso del Estado no interventor. Pero estas empresas, como hemos visto, ya se han transnacionalizado y pueden compensar la pérdida de la “asistencia estatal” con la expansión de sus actividades por otros países.

En contra de las clases populares, lo que vemos es el desmantelamiento del “contrato social petista”. Frente a la crisis económica y la disminución de los excedentes, el Estado debe ahora garantizar a cualquier precio los intereses de aquellos que otrora aceptaron ceder el discurso político a la “izquierda” *light*. Para generar legitimidad al “nuevo Estado mínimo”, invierten en una campaña de satanización del modelo anterior y criminalización de sus líderes a partir de un juicio político y de una prisión sin pruebas, coaccionando a



toda la izquierda, rehén de la lucha por la democracia formal y por la consigna “Lula Libre”.

El trágico escenario político y la voracidad de los que hoy están en el poder apunta a acabar con cualquier política de inclusión social, aunque limitada, empeorando aún más las condiciones de vida de las clases populares y haciendo que todos recuerden los “nostálgicos” tiempos de Lula. Pero, las respuestas para lo que vivimos hoy deberían de ser buscadas en las limitaciones del proyecto anterior que, en sus alianzas y estrategias, promovió el fortalecimiento del gran capital en lugar de su cuestionamiento, asegurando la despolitización de la pobreza, la desarticulación e invisibilización de los conflictos sociales, como garantía de su permanencia.

Notas

¹ Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

² Los intentos de reapertura democrática se inician durante el gobierno Ernesto Geisel (1974-1979), en 1985 es declarada la reapertura democrática que se hace efectiva con la promulgación de la Constitución de 1988.

³ Comprende el período de 1930 a 1964, pasando por los gobiernos de Getúlio Vargas (1930-1945; 1951-1954), Juscelino Kubitschek (1956-1961), Jânio Quadros (1961) y João Goulart (1961-1964).

⁴ La dictadura militar brasileña transcurre entre 1964 y 1985.

⁵ Resoluciones del 10° Encuentro Nacional (1995) del PT, p. 619. In: Iasi 2006, p.509..

⁶ Resoluciones del 10° Encuentro Nacional (1995) del PT, p. 617. In: Iasi, 2006, p.507.

⁷ Resoluciones del 12° Encuentro Nacional (2001) del PT, p. 38. In: Iasi 2006, p.510.

⁸ Presentada públicamente el 22 de junio de 2002.

⁹ Entre 2003 y 2006, hubo una reducción de 17.9% en los gastos de educación, 11.3% en salud y 8.2% en seguridad social. En el mismo período, los gastos con servicios de la deuda pública (interna y externa) aumentaron 16.8% (Gomes Alencar Jr, 2018).

¹⁰ Confederación Nacional de los Trabajadores en las Empresas de Crédito.

¹¹ El relatorio de Contec presenta los valores en reales (R\$ 63,63 mil millones). Para la conversión, consideramos la tasa de cambio oficial del Banco Mundial de 2002, de R\$ 2,92.

¹² El relatorio de Contec presenta los valores en reales (R\$ 254,76 mil millones). Para la conversión, consideramos la tasa de cambio oficial del Banco Mundial de 2010, de R\$ 1,759.



¹³ El relatorio de Contec presenta los valores en reales (R\$ 115,75 mil millones). Para la conversión, consideramos la tasa de cambio oficial del Banco Mundial de 2013, de R\$ 2,156

¹⁴ El autor presenta los valores en reales (R\$ 53,8 mil millones). Para la conversión, consideramos la tasa de cambio oficial del Banco Mundial de 2013, de R\$ 3,19.

¹⁵ Armando Boito Jr (2013) utiliza el concepto de gran “burguesía interna” para hacer referencia a esa fracción.

¹⁶ El BNDES fue creado con el objetivo de promover la política de industrialización y fortalecer las empresas nacionales, tanto públicas como privadas, siendo que durante los gobiernos populistas la prioridad era la empresa pública y en la dictadura, la empresa privada. En los años 1990, en consonancia con la política de desnacionalización de la economía, el BNDES pasó a actuar como agente facilitador de las privatizaciones. Lo que buscaremos sostener en las próximas líneas es que los gobiernos del PT buscaban reactivar el papel del banco como agente propulsor y financiador de las empresas privadas y públicas (los campeones nacionales), donde el gran capital privado fue el mayor beneficiario de una política que tenía como principal objetivo la transnacionalización de tales empresas y su mayor inserción en el mercado mundial.

¹⁷ Fondo de Amparo al Trabajador.

¹⁸ Programa de Integración Social y Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público.

¹⁹ FGTS – Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio; FI-FGTS – Fondo de Inversión del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio.

²⁰ Datos promedios fueron calculados a partir de los datos de activos totales en millones (R\$) disponibles en Serie Histórica Indicadores financeiros do BNDES desde 2002. Recuperado de:

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/centraldedownloads>

²¹ Sólo para Odebrecht, los préstamos entre 2006 y 2012 sumaron R\$ 7,200 millones, utilizados para sus inversiones en el extranjero (Stolowicz, 2016)

²² Programa de Aceleración de Crecimiento. Sólo en 2014 se invirtió R\$ 68.4 mil millones y hasta este año pocas obras habían sido concluidas.

²³ Tomamos la libertad de hacer uso de la expresión “al revés”, o en portugués, “às avessas”, utilizada por Francisco de Oliveira (2007) en su noción de “hegemonía às avessas” para describir el “lulismo”, pero aclaramos que nuestra propuesta de caracterizar el proyecto petista como “soberanía al revés” no se remete directamente al autor.



²⁴ Según James Petras (2013), entre los gobiernos de FHC, Lula y Dilma, el capital extranjero se desplaza para el sector de agrocombustibles (etanol) llegando a controlar 22% de las compañías brasileñas de azúcar y etanol, rápidamente entrando en amazonia y contribuyendo para la ampliación de la deforestación.

²⁵ En la segunda vuelta de las elecciones de 1989, 51% de los votos para Fernando Collor provenían del electorado que recibía hasta dos salarios mínimos. Entre esta parcela del electorado, Lula tuvo el 41% de los votos (André Singer, 2009). Las elecciones de 1994 y 1998 expresaron una victoria masiva de Fernando Henrique Cardoso, que venció ambas en la primera vuelta.

²⁶ El “Presupuesto Participativo” (PP) fue una experiencia implementada durante los años noventa en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. El proyecto tenía por objetivo involucrar las clases populares en los procesos de decisión sobre los destinos del presupuesto del municipio. Crítico de la experiencia, Julio Turra (2007) señala que solamente 17% del presupuesto pasaba por discusión en asambleas populares, además de estar condicionado a una política económica que tenía por prioridad el pago de las deudas locales con el gobierno central.

²⁷ Minha Casa, Minha Vida es un programa de financiamiento para adquisición de viviendas donde el Estado subsidia una parte del valor del inmueble.

²⁸ Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos.

²⁹ En diciembre de 2012, este era de R\$ 622, mientras que el indicado por el DIEESE era de R\$ 2.561,47.

³⁰ El Ministerio del Desarrollo Social trabaja con un valor promedio de transferencia individual, una vez que los valores oscilan en función de los criterios de selección. En 2017, el valor promedio de un beneficio individual era de R\$ 182,30, representando poco menos de un quinto del salario mínimo, que en la época era de R\$ 937.

³¹ El desempleo cayó del 13.92% en 2000 al 6.67% en 2014, la cifra más baja durante el período. Sin embargo, casi el 90% de los puestos de trabajo creados estaban en el rango de 1.5 salarios mínimos, mayoritariamente en el sector de servicios y exigían poca calificación profesional. En 2000, estos empleos representaban el 29.7% del total en el mercado de trabajo; en 2013, eran el 49.9%. Los empleos que se encontraban entre cinco y diez salarios mínimos disminuyeron del 16.9% al 9.2%, y los que estaban por encima de diez salarios, disminuyeron del 10.7% al 4.9% durante el mismo período (Sávio Cavalcante, 2015)

³² Para hacer tal comparación, retomamos el análisis de Francisco Weffort (1966), que definió el Estado brasileño en el período populista como un “Estado de Compromiso y



de Masas”: de “compromiso” entre las fuerzas que salen victoriosas en la “Revolución de 1930” (golpe liderado por Getúlio Vargas que marca el inicio del período “populista”), y de “masas” porque su base social estuvo en amplios sectores sociales.

³³ “Marolinha” significa una ola pequeña. La metáfora hecha por Lula quería reforzar que la crisis de 2008 no afectaba seriamente al país.

³⁴ En Brasil, cuando el mar presenta grandes olas tras fuertes lluvias, decimos “el mar está de resaca”.

³⁵ En 2002 fueron contabilizados pela CPT (Comissão Pastoral da Terra) 925 conflictos en el campo. Em 2003 eram 1.690, chegando a sua máxima (período de 2002-2015) em 2005, com 1.881. Em 2015, foram contabilizados 1.217. In: CPT Nacional, 2016.

³⁶ Según datos del DIEESE, hay una tendencia de aumento de las huelgas a partir de 2012. En este año fueron contabilizadas 877 entre la esfera pública y privada, siendo que, en 2003, 340. Ya en 2013, este número pasa para 2050. In: DIEESE, 2015.

³⁷ Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

³⁸ Federación de las Industrias del Estado de São Paulo.

³⁹ Confederación Nacional de las Industrias.

⁴⁰ Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería

⁴¹ Federación de las Industrias del Estado de Rio de Janeiro. ⁴² Federación Brasileña de Bancos

Bibliografía

Anderson, P. (2016). Crisis in Brazil. London Review Of Books, 38(8), 15-22. Recuperado de <https://www.lrb.co.uk>

Boito Jr., A. (2013). O lulismo é um tipo de bonapartismo? Uma crítica às teses de André Singer. Crítica Marxista, (37), 171-206. Recuperado de <https://bit.ly/3oMhYqd>

Bugiato, C. (2016). A política de financiamento do BNDES e a burguesia brasileira. Campinas, SP. Tesis (doctorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

Cavalcante, S. (2015). Classe média e conservadorismo liberal. In S. Velasco e Cruz, A. Kaysel & G. Cudas (org), Direita, volver!: o retorno da direita e o ciclo político brasileiro (1st ed., pp. 177-196). São Paulo: Fundação Perseu Abramo. Recuperado de <https://fpabramo.org.br/publicacoes/estante/direita-volver/>



CPT Nacional. (2016). *Conflitos no campo*. São Paulo.

da Conceição Tavares, M (2011); Petrelli Corrêa, V., & Simioni, M. (org). *Desenvolvimento e Igualdade. Homenagem aos 80 anos de Maria da Conceição Tavares*. Rio de Janeiro: IPEA.

de Oliveira, F. (2003). Política numa era de indeterminação: opacidade e reencantamento. In F. Teixeira da Silva, M. R. Capelari Naxara & V. C. Camilotti (org), *República, Liberalismo, Cidadania* (pp. 191-216). Piracicaba: Unimep.

de Oliveira, F. (2007). *Hegemonia às avessas [entrevista]*.

DIEESE. (2015). *Balanço das greves em 2013*. Recuperado de <https://www.dieese.org.br/balancodasgreves/2013/estPesq79balancogreves2013.pdf>

García Linera, Á. (2016). ¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?. In E. Sader, R. Forster, M. Canelas, R. Ramírez & J. Guijarro, *Las vías abiertas de América Latina: siete ensayos en busca de una respuesta: ¿fin de ciclo o repliegue temporal?* (1st ed., pp. 15-58). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Octubre.

Gomes Alencar Junior., O. (2018). *Estado, fundo público e gasto social: a experiência do nordeste do Brasil de 2007 a 2014 (Doctorado)*. Universidade Federal do Maranhão.

Iasi, M. (2016). *As metamorfoses da consciência de classe*. São Paulo: Expressão Popular.

Katz, C. (2018). *El ciclo dependiente cuarenta años después [Blog]*. Recuperado de <https://katz.lahaine.org>

Mansur, V. (2018). *Lucro recorde do Itaú durante a crise é anomalia do capitalismo brasileiro*. Brasil De Fato. Recuperado de <https://bit.ly/3jOIFlq>

Marchesini, L. (2018). *Benefícios do Bolsa Família sustentam 21% da população do país. Valor Económico*. Recuperado de <http://www.valor.com.br/brasil/5306087/beneficios-do-bolsa-familia-sustentam-21-da-populacao-do-pais>.

Martuscelli, D. (2017). *Notas sobre la naturaleza de clase en la actual crisis brasileña*. Memoria: Revista De Crítica Militante. Recuperado de <https://bit.ly/3kPFXIY>

Oliveira, M.J.N(2014). *Lucros dos bancos: síntese comparativa nos últimos três governos*. Contec Brasil. Recuperado de <https://bit.ly/35ThbeG>

Petras, J., & Veltmeyer, H. (2015). *Introducción. El neoextractivismo: ¿un modelo posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del siglo XXI?* (pp.13-43). México, Crítica.



- Petras, J. (2013). Brazil: Extractive Capitalism and the Great Leap Backward [Blog]. Recuperado de <https://petras.lahaine.org/brazil-extractive-capitalism-and-the-great-leap-backward/> https://doi.org/10.1163/9789004268869_009
- Sader, E. (2016). Brasil: de Lula al golpe blanco. In E. Sader, Á. García Linera, R. Forster, M. Canelas, R. Ramírez & J. Guijarro, *Las vías abiertas de América Latina - siete ensayos en busca de una respuesta: ¿fin de ciclo o repliegue temporal?* (1st ed., pp. 131-144). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Octubre.
- Saes, D. (2001). *República do capital*. São Paulo, SP: Boitempo Editorial.
- Sanz, B. (2017). O lado obscuro do 'milagre econômico' da ditadura: o boom da desigualdade. Recuperado de <https://bit.ly/3ehZOI8>
- Singer, A. (2009). Raízes sociais e ideológicas do Lulismo. *Novos Estudos*, (85), 83-102. <https://doi.org/10.1590/S0101-33002009000300004>
- Singer, P. (1998). De dependência em dependência: consentida, tolerada e desejada. *Estudos Avançados*, 12(33). Recuperado de <https://bit.ly/323vbBz>
- Stolowicz, B. (2016). *El misterio del posneoliberalismo: la estrategia para América Latina* (1st ed.). Colombia: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, ILSA / Espacio crítico Ediciones.
- Turra, J. (2007). Lula en Brasil: un gobierno en contradicción con su base social. In B. Stolowicz (coord), *Gobiernos de Izquierda en América Latina: un balance político* (1st ed., pp.77-103). Bogotá: Ediciones Aurora.
- Weffort, F. (1966). Estado e massas no Brasil. *Revista Civilização Brasileira*, 7, 137-158.